

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por CARLOS ESTEBAN CAÑAS RUIZ en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES- (Radicado 05001-31-05-019-2017-00266-01).

Se RECONOCE PERSONERIA para actuar a favor de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-, al abogado Néstor Eduardo Pantoja Gómez, con tarjeta profesional No. 285.871 del C.S de la J., conforme al poder que le fue conferido.

### ANTECEDENTES

El demandante pretende la declaratoria por vía judicial del derecho que le asiste a la pensión de invalidez, los intereses moratorios, la indexación y las costas del proceso (fls. 2-3).

Como sustento de lo anterior, expuso: Nació el 14 de diciembre de 1975, lo que se traduce en que para la presentación de la demanda tiene 41 años. Cuenta con 315.30 semanas cotizadas a Colpensiones, habiendo sido trasladado a Protrección S.A., pero devuelto nuevamente al RPMPD. El 18

de junio de 2013 Sura dictaminó su pérdida de capacidad laboral en un 51.45% con fecha de estructuración del 27 de junio de 2006 de origen común. En el año 2003 fue diagnosticado con una enfermedad congénita, crónica o degenerativa - Trastorno afectivo bipolar Tipo I-, año mismo en el que dejó de cotizar. El 11 de noviembre de 2016 solicitó ante Colpensiones la pensión de invalidez sin recibir respuesta. Agregó que la fecha de estructuración no se compadece con la fecha en que realmente dejó de ser útil en la vida laboral, habiendo surgido su enfermedad desde momento anterior a la solicitud de calificación y de la fecha de estructuración determinada conforme a la historia clínica (fls.2-5).

COLPENSIONES al dar respuesta al libelo aceptó la afiliación del demandante a esta administradora, y la calificación de pérdida de capacidad laboral afirmando no constarle los hechos restantes. Como excepciones de mérito propuso las que denominó: Inexistencia de la obligación de reconocer la pensión de invalidez, improcedencia de la reestructuración por enfermedad degenerativa, crónica o congénita, improcedencia de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, prescripción, compensación e imposibilidad de condena en costas.

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín (Ant.), en sentencia del 07 de julio de 2021, DECLARÓ que al demandante le asiste el derecho a la pensión de invalidez de origen común a partir del 01 de julio de 2017. CONDENÓ a Colpensiones a reconocer y pagar la suma de \$42.948.268 por concepto de retroactivo pensional liquidado entre el 01 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2021, imponiendo continuar reconociéndose una mesada pensional equivalente al salario mínimo legal mensual vigente con autorización de los descuentos en salud. CONDENÓ a Colpensiones a reconocer la indexación. DECLARÓ probada la excepción de improcedencia de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. ABSOLVIÓ a Colpensiones de las demás pretensiones de la demanda. CONDENÓ en costas a la demandada, se fijan las agencias en derecho en la suma de \$3.100.000.

El demandante aspira a que se modifique la decisión en lo que tiene que ver con la fecha del reconocimiento de la prestación, en tanto considera que debe acudirse es a la fecha en que se emitió el dictamen que determinó la pérdida de capacidad laboral y que corresponde al 21 de marzo de 2013, advirtiendo que las cotizaciones posteriores no afectan el derecho, o que si ello no se considera posible, se disponga el reconocimiento a partir del 31 de diciembre de 2015 cuando el actor cesó de forma definitiva sus cotizaciones al Sistema. Indicó que los intereses de mora deben ser reconocidos en la medida que Colpensiones está negando la prestación con desconocimiento de la jurisprudencia constitucional que ya tenía establecido el especial trato de las pensiones de invalidez de personas que padecen enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas.

Colpensiones por su parte también manifestó disenso sobre lo decidido, señalando que la ley es clara en los requisitos que deben cumplirse para accederse a la pensión de invalidez que se persigue y debe ser respetada, sin que en el asunto el actor los acredite, agregando que la enfermedad que dio lugar a la invalidez del demandante no está catalogada como degenerativa ni catastrófica, resultando inaplicable la teoría de la capacidad residual, siendo evidente que el origen de la patología se presentó en el año 2006, a partir de cuando no se logran las semanas requeridas, continuando con cotizaciones hasta el año 2015. Adujo que en este evento no es dable imponer costas procesales dada la actuación encuadrada dentro del principio de la buena fe.

La Sala igualmente en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conoce del asunto por el grado de consulta en favor de Colpensiones.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

## CONSIDERACIONES

Previo a resolver lo que corresponde, importa resaltar que en el presente evento se encuentran por fuera de discusión los siguientes presupuestos fácticos: i) Que el demandante nació el 14 de diciembre de 1975 (fl 26); ii) Que fue calificado por la Comisión Médico Laboral de Sura con un 51.45% de PCL, con fecha de estructuración del 27 de junio de 2006 (fls 32-41); iii) Que es afiliado a Colpensiones desde el 24 de agosto de 1994 (fls. 29-31 y 95-101) con un traslado a Protección S.A efectuado en el año 2012 anulado (fls. 64-65) con devolución de los aportes a Colpensiones (fl.63) y que en los tres años anteriores a la fecha de estructuración, cotizó 0.00 semanas, figurando desde el 01 de febrero de 2012 como independiente hasta el 31 de mayo de 2017 cuando cesó las cotizaciones al sistema (fls 95-101).

Lo anterior, pone en evidencia, que el debate se centra en establecer si bajo la postura jurisprudencial relativa a las enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas, hay lugar al reconocimiento de la pensión de invalidez.

Sobre esa materia, el criterio reiterado de la alta corporación es que por regla general, *“el derecho a la prestación pensional reclamada debe ser dirimido a la luz de la norma que se encuentra vigente al momento de la estructuración de la invalidez”* (CSJ SL409-2020, SL2204-2019 y SL938-2019, entre muchas otras).

No obstante, los eventos en que la pérdida de la capacidad laboral proviene de una enfermedad degenerativa, crónica o congénita, constituyen una excepción a la regla general y, por lo tanto *“la prudencia obliga a analizar las particularidades de cada caso a efecto de conceder u otorgar oportunamente las prestaciones económicas y de salud necesarias para la recuperación del afiliado y/o su subsistencia”* (CSJ SL472-2020).

Así, la Corte insistentemente ha previsto para estos padecimientos crónicos, congénitos y progresivos que el parámetro para determinar la asunción de los

presupuestos legales es distinto (CSJ SL3275-2019, SL4567-2019, SL4178-2020, SL4346-2020, SL1002-2020, SL770-2020; CSJ SL4178-2020, entre otras), pues ha señalado que es dable tener en cuenta, no solo la fecha en que se estructura la invalidez (regla general), sino también “(i) la calificación de dicho estado, (ii) la de solicitud de reconocimiento pensional, o (iii) la de la última cotización realizada -calenda donde se presume que la enfermedad se reveló de tal forma que le impidió seguir trabajando”.

A su vez, en la sentencia CSJ SL4178-2020, la Corporación invitó a realizar una labor exhaustiva de verificación de las condiciones que provocaron la invalidez del afiliado con miras a establecer con la mayor exactitud posible la enfermedad que dio lugar a la invalidez, precedente que conserva plena correspondencia con lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia CC SU-588 de 2016, la cual señaló las reglas aplicables al reconocimiento de la pensión de invalidez de las personas que padecen de enfermedades congénitas, crónicas o degenerativas que son: i) tener en cuenta factores como “las condiciones específicas del solicitante y de la patología padecida, así como su historia laboral”; (ii) debe “verificar que los pagos realizados después de la estructuración de la invalidez, hayan sido aportados en ejercicio de una efectiva y probada capacidad laboral residual del interesado y que éstos no se realizaron con el único fin de defraudar el Sistema de Seguridad Social”, y (iii) debe determinar el momento desde el cual se verificará que la persona cuenta con el número de semanas legalmente requeridas para obtener la pensión, ya sea la fecha de calificación de la invalidez, o la fecha de la última cotización efectuada, porque se presume que fue allí cuando el padecimiento se manifestó de tal forma que le impidió continuar siendo laboralmente productivo.

De modo que se ha considerado que no es racional ni razonable que la Administradora de Fondos de Pensiones niegue el reconocimiento del derecho a la pensión de invalidez a una persona que sufre una enfermedad congénita, crónica y/o degenerativa, tomando como fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral el momento en el que se presentó el accidente, primer síntoma o la fecha del diagnóstico, pues ello desconoce

que, pese a las condiciones de la enfermedad, la persona pudo desempeñar una labor y, en esa medida, desechar las semanas aportadas con posterioridad al momento asignado en la calificación, implicaría asumir que las personas en situación de discapacidad, en razón de su estado de salud, no pueden ejercer una profesión u oficio que les permita garantizarse una vida en condiciones de dignidad (Ver SL3275-2019, SL5470-2021 y SL913-2022).

El actor como puede verificarse del dictamen de calificación (fls. 32-37) y el historial clínico aportado (fls. 42-62), padece de “*Trastorno afectivo bipolar Tipo I*”, enfermedad calificada como crónica por la entidad calificadora (fl.190) debiendo precisarse que la doctrina entiende las enfermedades crónicas como aquellas de progresión lenta y que a largo plazo pueden no tener cura.

Acudiendo a la fecha de estructuración fijada para el 27 de junio de 2006 por parte de Sura, se tiene que las consideraciones que dieron lugar a esa determinación, se encuadran en el momento en que se registró la primera hospitalización sin mejoría funcional en su evolución posterior (fl.41), siendo considerado por el *a quo* que el demandante tuvo capacidad laboral hasta el momento en que presentó su última cotización en mayo de 2017.

Al respecto, se tiene que entendiendo la “*capacidad laboral residual*” como la posibilidad que tiene una persona de ejercer una actividad productiva que le permita garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, debe indicarse que por el solo hecho de existir cotizaciones posteriores a la fecha de estructuración en el particular, no se da cabida a la alteración de la fecha de estructuración de invalidez definida por la autoridad médica competente, pues debe existir una razón justificativa suficiente derivada de un análisis detenido y ponderado de las circunstancias específicas del afiliado y sus condiciones para trabajar durante el tiempo en que su patología se lo permitió y como producto de ello cotizar al sistema, para de esta manera establecer el punto de partida a fin de realizar el conteo de aportes que impone la ley, con previsión de evitar un fraude al sistema general de pensiones que a su vez garantiza su sostenibilidad fiscal (Ver SL1598-2022).

Verificado el historial clínico que por incompleto para lo que nos ocupa obliga a acudir a los apartes de él extraídos para emitir la experticia de calificación, en coherencia con el de cotizaciones del afiliado, lo que se observa es que Carlos Esteban Cañas Ruiz presenta el diagnóstico de TAB - Trastorno afectivo bipolar- desde sus 17 años con una hospitalización cada año, momento desde el cual está en seguimiento por psiquiatría con medicación, presentando subas y bajas dentro de la evolución patológica, en la que para una revisión estaba compensado y en buenas condiciones generales y en la siguiente se veía irritable, con episodios de agresividad, ideas delirantes, hiperactividad, síntomas depresivos e ideas suicidas con múltiples hospitalizaciones entre los años 2004 y 2006, registrándose para el 27 de julio de 2006 pérdida de 22 kg, agresividad y consumo de alucinógenos con hospitalización hasta el 04 de septiembre de 2006. Luego solo para el año 2010 se documenta tratamiento homeopático sin hospitalizaciones, con nuevos episodios sintomáticos en septiembre de 2012 con ingreso a la Fundación Luz del Camino en San Jerónimo - Antioquia luego de ser dado de alta, en la que ha permanecido internado para el seguimiento de la medicación en fase de normalidad (eutimia), con buena alimentación.

Ahora, de la revisión de su historia laboral se desprende que como trabajador dependiente efectuó cotizaciones hasta el 31 de enero de 2009, reiniciadas ya como independiente el 01 de diciembre de 2012 con cesación definitiva el 31 de mayo de 2017.

Lo que muestra esta probanza documental, es su insuficiencia para determinar entre mejoras y retrocesos en la evolución de la enfermedad de Carlos Esteban Cañas, el momento en el que de manera permanente y definitiva perdió su capacidad para continuar desarrollando una actividad laboral que le permitiera procurar ingresos para su subsistencia, considerándose por esta Sala de Decisión que no es viable acoger la decisión del Juez de Instancia, cuando tomó como tal el 31 de mayo de 2017 - última cotización pagada-, ya que tales aportes realizados al sistema por el solicitante como independiente aunque corresponden a 227.07 semanas (fl.95), no están sustentados en el ejercicio de una efectiva y probada

capacidad laboral, encontrando que previo a ellos, se reportaron 28 días para enero de 2009, pero con una inactividad presentada desde el 01 de septiembre de 2002, a más que desde el año 2012, se registró su ingreso a la Fundación la Luz del Camino donde ninguna labor productiva ejecutaba (fl.38), siendo referenciado en su examen físico realizado el 21 de marzo de 2013 para efectos de su valoración de pérdida de capacidad laboral, su oficio como mensajero por el término de 2 años y 8 meses en total, sin referir ningún otro trabajo.

De ese modo, surge evidente que no es dable impartir la conclusión referida a que el padecimiento se manifestó de manera evidente y contundente para definir la posibilidad de desempeñarse laboralmente desde alguna de las posibilidades brindadas por la alta Corporación en nuestra especialidad en el marco de la teoría de la capacidad residual, esto es, desde la calificación del estado de invalidez realizada el 21 de marzo de 2013 (fl.34), o para cuando se procedió a elevar la reclamación de la prestación - 11 de noviembre de 2016-, pues son eventos ocurridos con posterioridad a la fecha en la que el actor desde tiempo atrás había agotado su posibilidad de desempeñarse en un oficio, y mucho menos, puede ello derivarse de la última cotización, por no entenderse hechas las correspondientes al lapso del 2012 al 2017 con uso de su capacidad residual, apreciando por el contrario, que la entidad realizadora del dictamen, dio por revelada la enfermedad al punto de imposibilitar el reintegro a sus labores desde el 27 de junio de 2006, fecha que aunque el registro extraído del historial médico la referenció para el 27 de julio de 2006 (fl.39), es tomada en cuenta por esta Colegiatura la primera aun cuando no se cuente con el documento originario de esa apreciación médica, pues fue delimitada en el acápite de las conclusiones de la sustentación (fl.41) sin existir oposición alguna a lo allí contenido, y también se insertó en el dictamen (fl.37) y en la notificación remitida al interesado (fl.32-33), data en la que el demandante contaba con un deterioro físico evidente y generó una hospitalización importante sin evidencia de tener para tal época posibilidad de ocuparse en una tarea remuneradora.



Debe decirse que los vestigios aportados tampoco brindan convicción para apartarse del examen ocupacional y atribuir a un momento previo, la efectiva merma de capacidad laboral, pues si bien el haber de cotizaciones del afiliado muestra previo a su calidad de independiente como última cotización el 31 de agosto de 2002, el historial clínico no da cuenta del estado preciso de la enfermedad para ese momento, por lo que mal haría la Sala sin razón justificativa alguna o sin medio probatorio que así lo permita, mudar la fecha de estructuración de invalidez, no contando con los conocimientos profesionales ni los medios idóneos requeridos, para señalar que la patología de progresión lenta como la que padece el accionante, llegó a un nivel de afectación de tal magnitud que le impidió de manera cierta, llevar a cabo una labor solo con posterioridad a la estructuración del estado de invalidez, y contabilizar las cotizaciones efectuadas luego del arribo al estado de invalidez bajo la postura de la capacidad residual, observándose que esa determinación de la fecha de estructuración si tuvo en cuenta el desarrollo de la afección en un espacio prolongado, con mengua de la fuerza laboral de manera paulatina, atendiendo que la sintomatología y diagnóstico dio aparición desde 1992.

De accederse a lo pretendido, se desdibujaría la finalidad de tal teoría, en tanto ello lo que busca es que las personas con afecciones de tipo crónico tengan la posibilidad de procurarse por sus propios medios una calidad de vida acorde con la dignidad humana pese a su condición, hasta que su estado de salud les impida seguir en uso de su capacidad laboral, por lo que esas cotizaciones se avalan para determinar el acceso al derecho, y en este caso, la posibilidad de ejecutar una actividad productiva no se vislumbra extendida más allá de la fecha en que se definió fue estructurado su estado.

Las anteriores reflexiones conllevan a que el conteo de las semanas legalmente exigidas principie el 27 de junio de 2006, como fue definido por la entidad calificadora, data a partir de la cual el actor logró 0.00 semanas de cotización, derruyendo los argumentos de la activa y del *a quo* para acceder a la prestación bajo la teoría planteada, deviniendo en necesario revocar la

decisión objeto de estudio, para en su lugar absolver a Colpensiones de las pretensiones promovidas en su contra.

Conforme a lo preceptuado en el artículo 365-4 del CGP, las costas en ambas instancias estarán a cargo del demandante, fijándose por agencias en derecho en esta sede en la suma de \$200.000.

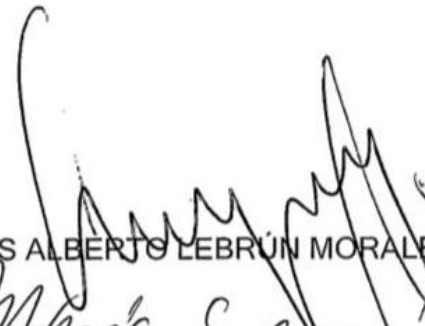
### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **REVOCA** la sentencia objeto de apelación y consulta de fecha y procedencia conocidas y, en su lugar, **ABSUELVE** a Colpensiones de las pretensiones de la demanda.

Las costas en ambas instancias estarán a cargo del demandante. Como agencias en derecho en esta sede se fija la suma de \$200.000.

Notifíquese la presente decisión por EDICTO (numeral 3° del literal d, del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y AL2550-2021, CSJ)

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



NANCY GUTIERREZ SALAZAR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310501920170026601  
**Proceso:** Ordinario  
**Demandante:** CARLOS ESTEBAN CAÑAS RUIZ  
**Demandado:** COLPENSIONES  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 19/07/2022  
**Decisión:** REVOCA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 21/07/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario